

contenida en la disposición final de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1995<sup>25</sup>.

En fin, las Comunidades Autónomas vienen actuando competencias propiamente legislativas —no meramente aplicativas de la legislación laboral estatal— en sus respectivos ámbitos geográficos sobre aspectos relacionados con el fomento del empleo y la formación profesional —materias éstas que, junto con las sociedades cooperativas, están fuera del contenido de la *legislación laboral* que el art. 149.1 de la CE atribuye en exclusiva al Estado, según doctrina del Tribunal Constitucional, por no afectar directamente a las relaciones de trabajo por cuenta ajena<sup>26</sup>, con alcance interprofesional o para determinados colectivos laborales —así, planes ocupacionales específicamente dirigidos a paliar el desempleo agrario estacional en los límites de su territorio—.

## V. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR AGRARIO

Dada la amplitud e importancia del tema anunciado, cuyo tratamiento, con la profundidad que merece, vendría a descompensar la estructura del presente capítulo, dejamos para el siguiente el estudio de los rasgos peculiares de la negociación colectiva en la agricultura.

## VI. LA ORDENANZA GENERAL DE TRABAJO EN EL CAMPO

Es de sobra conocida la regulación que establece el ET en cuanto a las normas estatales reglamentarias, de ámbito sectorial o empresarial, que tan decisivo papel desempeñaron en el sistema pre-constitucional español de relaciones laborales.

25. Ambas normas constituyen supuestos paradigmáticos de reglas (en este caso, estatales) acotadas sectorialmente por el juego de un doble criterio: profesional —se dirigen sólo, o con carácter preferente (PER), a los trabajadores agrícolas— y territorial —únicamente se aplican en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura—.

26. Vid. las SS. del TCo. de 30 de junio de 1982, 29 de julio de 1983, 27 de marzo de 1984 y 28 de marzo de 1985, entre otras.